

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones del séptimo informe periódico de España ante el Comité contra la Tortura – Centros de Internamiento de Extranjeros (English below)

Por lo que hace a la información proporcionada por el Estado en los párrafos 155 a 163, lo primero que se debe señalar es que en muchos casos se trata de transcripciones literales de normas vigentes. Lo que significa que, efectivamente, existen de manera formal todos los mecanismos que se señalan, pero en la práctica no se implementan de manera adecuada y efectiva, generándose vulneraciones de derechos humanos.

Como se indica en el párrafo 156, el internamiento es una **medida cautelar. Formalmente es así, pero no en la práctica**. Si se tratase de una medida cautelar, ésta solo podría durar el tiempo que dura el procedimiento principal del cual depende. Si el llamado internamiento sólo puede aplicarse si el expediente de expulsión se tramita por un procedimiento preferente y éste de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería (artículos 234 a 237) se debe desarrollar en un máximo de 8 días; el plazo máximo de 60 días o cualquier otro superior a esos 8 días se muestra como desproporcional y, por tanto, se configura una detención arbitraria¹.

Si atendemos a los criterios establecidos por el TEDH en relación a que la detención sólo se justificará por el tiempo que dure el proceso; que la duración de esta medida no debe exceder el plazo razonable necesario para alcanzar el objetivo perseguido y; que el principio de proporcionalidad es especialmente importante y la duración de la detención es un factor relevante en el análisis de dicha proporcionalidad, es fácil determinar que el plazo máximo de 60 días o su promedio según cifras oficiales (26-45 días) hace a esta **medida desproporcional y, por tanto, arbitraria**.

Con lo que la formalmente “medida cautelar”, en la práctica, **se utiliza como mecanismo de sanción, estigmatización y afectación de la integridad** física y psicológica de las personas migrantes que deben pasar un largo tiempo privadas de libertad. Esto se confirma por el hecho de que la propia Fiscalía General del Estado reconoce que “se sigue constatando una importante diferencia entre el número de personas ingresadas (6.473) y las efectivamente expulsadas (3.871)”². Demostrándose que ni es una medida cautelar, ni cumple con su finalidad legal. Por lo que se convierte en un claro trato degradante de las personas migrantes.

Con esa base, todo lo que pasa en los CIE ya lleva una base de arbitrariedad.

Por lo que hace a los párrafos 155, 156, 157, 160, 162 y 163 del informe del Estado en el que se describen mecanismos de control, queja, supervisión y registro, es cierto que existen en las normas, pero en la práctica **no hay transparencia** en la **gestión, trámite y resultados** que dan esos mecanismos. Por lo que el Estado, más que señalar su existencia, debería informar de todas las situaciones que se han atendido y sus resultados.

De la única **información oficial** pública disponible³, se **constata** que, **contrario a lo que informa el Estado español**, los CIE no cumplen con las condiciones necesarias para la privación de libertad de las personas migrantes, ni se conocen resultados de los mecanismos de los que se presume su existencia. Así por ejemplo:

- Se aprecia un deterioro progresivo del Centro derivado del uso y la constante afluencia de personas⁴.
- La mayor parte de las peticiones, quejas o reclamaciones efectuadas han venido referidas al servicio médico, habiéndose denunciado también en varias ocasiones maltrato por parte de algún funcionario⁵.
- La Sala de observación si algún interno precisa un seguimiento específico, [...] resulta insuficiente y no cuenta con los medios adecuados para su correcta función⁶.

¹ Castilla Juárez, Karlos, *¿Detención por motivos migratorios? Respuestas de los derechos humanos para España y México*, Trirant lo Blanch, 2018, pp. 244-245.

² Unidad de Extranjería, FGE, *Memoria 2020*, p. 12. Disponible en: <https://www.fiscal.es/-/extranjeria>

³ Para el 26 de mayo de 2023 no está disponible la Memoria 2021 ni 2022 de la Fiscalía General del Estado, por lo que no se puede contrastar información oficial más reciente. Confirmándose la opacidad.

⁴ Unidad de Extranjería, FGE, *Memoria 2020*, p. 13. Disponible en: <https://www.fiscal.es/-/extranjeria>

⁵ *Ibidem*, p. 14.

⁶ *Idem*.

- Junto a internos procedentes de las costas del Mediterráneo sometidos a procedimientos de devolución y sin antecedentes penales conviven internos con amplio historial delictivo, objeto del art. 89 del Código Penal o procedentes de centros penitenciarios⁷.
- A pesar de las mejoras estructurales del CIE, se observaron deficiencias como la falta de mobiliario, defectos en la previsión de las funciones que han de desempeñarse en el CIE y su adecuación a la arquitectura del edificio, manteniéndose la ya crónica deficiencia en la asistencia letrada de los internos como se viene exponiendo en las memorias anteriores⁸.
- Se observó como deficiencia que no se les informa sobre las posibilidades que nuestra legislación ofrece a las víctimas de trata, obviando quizás que los hombres también pueden ser víctimas de este delito y no es un delito exclusivamente femenino⁹.
- La preocupante insuficiencia de personal, fue ya advertida en las previas actas de visita, indicándose que tal situación generaría graves problemas de seguridad¹⁰.
- Conviene poner de relieve que, si bien es cierto, que algunas de las deficiencias observadas en pasados años han sido al menos disminuidas, persisten algunas importantes: especialmente, la falta de calefacción tanto para internos y funcionarios la ausencia de un cierre centralizado para las habitaciones de los internos; y, la escasez de mobiliario de las habitaciones¹¹.
- Hay algunas quejas en el orden sanitario producidas fundamentalmente por el ingreso de internos en un mal estado de salud para los que el centro no puede arbitrar una correcta solución¹².
- Quejas también por las esperas que en ocasiones se producen para ser vistos por el médico y que según el facultativo que presta sus servicios allí son sólo en ocasiones puntuales y únicamente cuando se demanda por un gran número de internos¹³.
- Siguen sin existir intérpretes fijos y falta también un convenio con el Colegio de Abogados de Murcia para la asistencia letrada permanente¹⁴.
- Se han registrado varias quejas contra letrados que asisten al Centro de Internamiento y que según refieren los internos tras cobrarles determinadas cantidades de dinero no logran los resultados prometidos¹⁵.
- A veces los problemas surgen por el tiempo medio de estancia que los internos pasan en el Centro antes de que se materialice su expulsión. Dicho tiempo parece excesivo ya que rondaría al parecer una estancia media de 40 días para llevarse a cabo¹⁶.

Todo lo anterior, es constatado por **OSC** que, enfrentando muchas **dificultades** para llevar a cabo **visitas en los CIE** a pesar de la previsión reglamentaria de la autorización, han podido documentar esas y más situaciones. Por lo que, lo que afirma el Estado en su informe carece de veracidad en varios aspectos como ha quedado demostrado.

Ante esta situación, ese **Comité** debe **RECOMENDAR** al Estado español en este ámbito que:

- Desarrolle reglamentariamente todas las medidas alternativas al internamiento previstas en el artículo 61 de la Ley de Extranjería para que puedan ser aplicadas en sustitución del internamiento.
- Limite el plazo de internamiento a la naturaleza y fines de una medida cautelar.
- Establezca de manera práctica y no solo legal, mecanismos eficaces, transparentes y con participación de la sociedad civil para el control, vigilancia y supervisión de los CIE.

⁷ *Ibidem*, p. 15.

⁸ *Idem*.

⁹ *Idem*.

¹⁰ *Idem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 16.

¹² *Ibidem*, p. 17.

¹³ *Idem*.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ *Idem*.

¹⁶ *Ibidem*, p. 18.

Response to paragraph 20 of the list of issues of the seventh periodic report of Spain to the Committee against Torture - Foreigners Internment Centers (CIEs in Spanish)

With regard to the information provided by the State in paragraphs 155 to 163, the first thing to note is that in many cases these are literal transcriptions of regulations in force. This means that, indeed, all the mechanisms that are indicated exist formally, but in practice they are not implemented adequately and effectively, generating violations of human rights.

As indicated in paragraph 156, internment is a **precautionary measure. Formally it is so, but not in practice**. If it were a precautionary measure, it could only last as long as the main proceeding on which it depends. If the so-called internment can only be applied if the expulsion file is processed by a preferential procedure and this in accordance with the Regulations of the Immigration Law (articles 234 to 237) must be developed in a maximum of 8 days; the maximum term of 60 days or any other greater than those 8 days is shown as disproportionate and, therefore, an arbitrary detention is configured¹⁷.

If we attend to the criteria established by the ECtHR in relation to the fact that the detention will only be justified for the time that the process lasts; that the duration of this measure should not exceed the reasonable period necessary to achieve the objective pursued and; Since the principle of proportionality is especially important and the duration of the detention is a relevant factor in the analysis of said proportionality, it is easy to determine that the maximum term of 60 days or its average according to official figures (26-45 days) **makes this disproportionate and therefore arbitrary measure**.

Thus, the formally "precautionary measure", in practice, **is used as a mechanism for sanctioning, stigmatizing, and affecting the physical and psychological integrity of migrants** who must spend a long time deprived of liberty. This is confirmed by the fact that the State Attorney General's Office itself acknowledges that "a significant difference continues to be observed between the number of people admitted (6,473) and those actually expelled (3,871)"¹⁸. Demonstrating that it is not a precautionary measure, nor does it fulfill its legal purpose. For what becomes a clear degrading treatment of migrants.

With this base, everything that happens in the CIE already has a base of arbitrariness.

With regard to paragraphs 155, 156, 157, 160, 162 and 163 of the State's report in which control, complaint, supervision and registration mechanisms are described, it is true that they exist in the regulations, but **in practice they do not there is transparency in the management, processing and results that these mechanisms give**. Therefore, the State, rather than pointing out its existence, should report all the situations that have been dealt with and their results.

From the only **official public information** available¹⁹, it is verified that, **contrary to what the Spanish State reports**, the CIEs do not meet the necessary conditions for the deprivation of liberty of migrants, nor are the results of the mechanisms that are known. For example:

- A progressive deterioration of the Center derived from use and the constant influx of people is appreciated²⁰.
- Most of the requests, complaints or claims made have been referred to the medical service, mistreatment by an official having also been reported on several occasions²¹.
- The Observation Room, if any inmate requires specific follow-up, [...] is insufficient and does not have the adequate means for its proper function²².

¹⁷ Castilla Juárez, Karlos, *¿Detención por motivos migratorios? Respuestas de los derechos humanos para España y México*, Trirant lo Blanch, 2018, pp. 244-245.

¹⁸ Immigration Unit, FGE, Report 2020, p. 12. Available in: <https://www.fiscal.es/-/extranjeria>

¹⁹ On May 26, 2023, the 2021 or 2022 Report of the State Attorney General's Office (FGE) is not available, so it is not possible to verify more recent official information. Confirming the opacity.

²⁰ Immigration Unit, FGE, Report 2020, p. 13. Available in: <https://www.fiscal.es/-/extranjeria>

²¹ *Ibidem*, p. 14.

²² *Idem*.

- Along with inmates from the Mediterranean coast subjected to return procedures and without a criminal record, inmates with extensive criminal records, object of art. 89 of the Penal Code or coming from prisons²³.
- Despite the structural improvements of the CIE, deficiencies were observed such as the lack of furniture, defects in the anticipation of the functions that have to be performed in the CIE and its adaptation to the architecture of the building, maintaining the already chronic deficiency in assistance lawyer for the inmates, as has been stated in previous reports²⁴.
- It was noted as a deficiency that they are not informed about the possibilities that our legislation offers to victims of trafficking, perhaps ignoring that men can also be victims of this crime and it is not an exclusively female crime²⁵.
- The worrying insufficiency of personnel was already noted in the previous visit minutes, indicating that such a situation would generate serious security problems²⁶.
- It should be highlighted that, although it is true that some of the deficiencies observed in past years have at least been reduced, some important ones persist: especially, the lack of heating for both inmates and staff, the absence of a centralized lock for the inmate rooms; and, the shortage of furniture in the rooms²⁷.
- There are some complaints in the sanitary order produced mainly by the admission of inmates in a bad state of health for which the center cannot arbitrate a correct solution²⁸.
- Complaints also about the wait that sometimes occurs to be seen by the doctor and that according to the physician who provides his services there are only on specific occasions and only when demanded by a large number of inmates²⁹.
- There are still no fixed interpreters and there is also an agreement with the Murcia Bar Association for permanent legal assistance³⁰.
- Several complaints have been registered against lawyers who attend the Internment Center and who, according to the inmates, after charging them certain amounts of money, do not achieve the promised results³¹.
- Sometimes the problems arise from the average length of stay that the inmates spend in the Center before their expulsion materializes. Said time seems excessive since it would seem to be around an average stay of 40 days to be carried out³².

All of the above is verified by OSCs that, facing many **difficulties to carry out visits in the CIEs** despite the regulatory provision of the authorization, have been able to document these and more situations. Therefore, what the State affirms in its report lacks veracity in several aspects, as has been demonstrated.

Faced with this situation, this **Committee must RECOMMEND to the Spanish State** in this area that:

- Develop by regulation all the alternative measures to internment provided for in article 61 of the Immigration Law so that they can be applied as a substitute for internment.
- Limit the term of internment to the nature and purposes of a precautionary measure.
- Establish, in a practical and not only legal manner, effective, transparent mechanisms with the participation of civil society for the control, surveillance, and supervision of the CIEs.

²³ *Ibidem*, p. 15.

²⁴ *Idem*.

²⁵ *Idem*.

²⁶ *Idem*.

²⁷ *Ibidem*, p. 16.

²⁸ *Ibidem*, p. 17.

²⁹ *Idem*.

³⁰ *Idem*.

³¹ *Idem*.

³² *Ibidem*, p. 18.